

Inconformidad con servicios públicos

El clientelismo político es una plaga que se ha posado sobre el Estado.

En el informe “Latinobarómetro 2007” se consignan algunos datos interesantes que ilustran sobre la realidad de nuestro país. El 56 por ciento está insatisfecho con los servicios públicos y el 23 por ciento regularmente satisfecho (el 23 por ciento está satisfecho). Asimismo, el 26 por ciento cree que la privatización fue beneficiosa y el 33 por ciento estima que la propiedad privada goza de protección.

A la vez, el 27 por ciento de los encuestados aprueban la gestión gubernamental, el 31 por ciento tiene confianza en el Gobierno, el 24 por ciento confía en el Presidente de la República, el 24 por ciento tiene fe en los partidos políticos y la Policía es vista por el grueso de la población con desconfianza y temor. Solamente el 31 por ciento está complacido con la democracia, en tanto que apenas el 29 por ciento se siente satisfecho con la economía.

Como podrá advertirse, la inmensa mayoría de guatemaltecos, además de que no participa de los beneficios del crecimiento económico, no está conforme con las instituciones democráticas ni con la prestación de servicios públicos básicos (justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura física), pero, peor aún, no tiene confianza en sus autoridades ni en los políticos.

La altísima conflictividad social es el principal síntoma de la falta de seguridad y de justicia. Los conflictos irresolutos redundan en violencia e impunidad, que se traducen en riesgo y vulnerabilidad para la vida humana, la integridad física de las personas, los bienes, los negocios y el desarrollo personal en general.

Por otro lado, el clientelismo político (intercambio de apoyo político y votos por favores y privilegios personales) es una verdadera plaga que se ha posado sobre el Estado, que día a día succiona más y más recursos públicos. Al efecto, juega un papel principalísimo el denominado sistema paralelo de gasto público (fondos sociales, fideicomisos, Cocodes y demás), caracterizado por la discrecionalidad, la opacidad, el despilfarro y la corrupción, y a través del cual se canaliza el 40 por ciento de la inversión pública. Asimismo, la ausencia de fiscalización, de rendición de cuentas y de acceso a la información pública contribuye a una malsana e ineficaz gestión pública.

Empero, el desencanto de la población con la democracia institucional es lo más desalentador y preocupante. El hecho de que casi el 70 por ciento de los guatemaltecos haya perdido la fe en la democracia y no tenga confianza en el Gobierno electo, significa que existe terreno fértil para el surgimiento de liderazgos populistas emocionantes y para los cambios no programados.

La recuperación de la confianza en la democracia, además de una gestión pública eficaz y transparente, requiere de una profunda e integral reforma política e institucional, en función del bien común.